



Rama Judicial
República de Colombia

Santiago de Cali, tres (03) de febrero de dos mil veintiuno (2.021)

Auto interlocutorio No. 62

RADICACIÓN:	76001-23-33-000-2020-00543 - 00
MEDIO DE CONTROL:	Control inmediato de legalidad
ACTO ADMINISTRATIVO	DECRETO 051 DEL 9 DE ABRIL DE 2020
AUTORIDAD	Municipio de Yotoco
MAGISTRADO PONENTE:	Víctor Adolfo Hernández Díaz

Encontrándose el proceso de la referencia a Despacho para proferir el fallo que en derecho correspondiere, se observa que, una vez analizado el acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad, no es plausible proferir sentencia, según se analizará a continuación.

ANTECEDENTES

El ente territorial remitió el acto administrativo de la referencia para efectos del control inmediato de legalidad previsto en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011.

Se trata del Decreto 051 del 09 de abril de 2020 que en el artículo primero de su parte resolutive dispuso:

"Artículo 1. Suspensión de términos y tramites y actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Suspende de manera total los términos de los trámites y actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa que a continuación se indican, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social. La suspensión afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de meses o años. (...)”

Por reparto de la Secretaría General de esta Corporación, el control inmediato de legalidad del decreto municipal atrás referido le fue asignado para su sustanciación y proyección a este Despacho, el cual resolvió ADMITIR ese medio de control a través ordenando imprimirle el trámite previsto en el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, considerando que:

"En relación a dicho acto administrativo remitido por la Autoridad Local para el control inmediato de legalidad, se observa que la orden emitida consiste principalmente en suspender los términos y actuaciones administrativas o judiciales en sede administrativa en la Administración Central del Municipio de Yotoco hasta tanto permanezcan vigente la Emergencia Sanitaria, y también dejó claro que el término para atender las peticiones que se encuentran en curso o se radiquen durante la vigencia de la emergencia sanitaria, se le aplicará lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo 491 de 2020.

De acuerdo a lo anterior, encuentra el Despacho que el decreto objeto de estudio fue expedido en desarrollo del Decreto N° 417 del 17 de marzo de 2020 y en virtud de las facultades constitucionales y legales conferidas al Alcalde, consagrada en el numeral 3º del artículo 315 de la Constitución Política y en el numeral 1º del literal d del artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, por lo que se concluye que la solicitud debe avocarse.”

Una vez notificado el auto admisorio, la Procuradora delegada ante esta Corporación, emitió concepto dentro del presente asunto, señalando que no objetaba el Decreto No. 051 del 09 de abril de 2020 proferido por el **MUNICIPIO DE YOTOCO – VALLE DEL CAUCA**, por cuanto cumplía con todos los parámetros legales y jurisprudenciales, es decir, era un acto administrativo de carácter general, guardaba conexidad con la Emergencia Sanitaria y con el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno Nacional, fue dictado en desarrollo de los decretos legislativos expedidos por el Gobierno Nacional y guardaban relación directa con las medidas necesarias para superar dicho Estado de Emergencia, entre otras.

El Municipio de Yotoco – Valle del Cauca, guardó silencio.

CONSIDERACIONES

Los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política consagran los estados de excepción y facultan al presidente de la República a expedir decretos legislativos exclusivamente para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, es decir, con relación directa y específica con el estado de excepción.

Por su parte, el 20 de la Ley 137 de 1994 dispone que las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. También ordena que las autoridades deberán remitirlos en las 48 horas siguientes. El artículo 136 del CPACA reproduce la disposición y añade que, si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.

Respecto a los presupuestos procesales para que proceda el control inmediato de legalidad vale la pena esquematizar:

- i) Que se trate de medidas de carácter general,
- ii) Que sean dictadas en ejercicio de función administrativa,
- iii) Y como desarrollo de los decretos legislativos
- iv) Durante los estados de excepción.

Para la Sala Mayoritaria¹:

"35. Una interpretación literal del artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y del artículo 136 de la Ley 1437 de 2011 permite concluir que los actos administrativos que están sujetos a control inmediato de legalidad deben cumplir las siguientes dos características: i) ser de carácter general y ii) ser expedidos en desarrollo de los decretos legislativos expedidos por el presidente de la República. Esa segunda característica supone que el acto administrativo contiene disposiciones que estén encaminadas a permitir la ejecución o aplicación del decreto legislativo (en ello consiste su desarrollo)"

- El Decreto 417 que declara la emergencia económica y social es decreto legislativo, pero no puede ser desarrollado directamente por las autoridades territoriales.

- Los Decretos 418, 420, 457, 597 que versan sobre el orden público y el aislamiento social obligatorio, se fundan en competencias ordinarias del presidente sin que se remitan al artículo 215 Constitucional, no fueron suscritos por todos los ministros, y la Corte Constitucional no asumió su control de oficio, por tanto, no son decretos legislativos, en esa medida, los decretos locales que se profieran con base en ellos o en relación a los temas que ellos tratan, no son susceptibles de control inmediato de legalidad.

Dice la sala lo siguiente:

"74. Y es que durante el Estado de Excepción el Gobierno Nacional tiene la potestad de expedir decretos legislativos (que tienen fuerza de ley), pero no por ello pierde la competencia para proferir decretos ordinarios. Siendo así, la elección del tipo de acto normativo a utilizar para imponer el aislamiento preventivo obligatorio (si se hacía mediante decreto legislativo o mediante decreto ordinario) era una decisión que le correspondía al Gobierno Nacional, y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no puede alterar la naturaleza del acto con base en su contenido. Desde luego, el hecho que se haya impuesto el aislamiento preventivo obligatorio mediante decreto ordinario tiene implicaciones: por ejemplo, que ese acto normativo debe respetar la Constitución y el bloque de constitucionalidad, pero además no podrá ser contrario a la ley.

En otra providencia se lee²

a. "Los Decretos Legislativos de acuerdo con la Constitución de 1991, son aquellos dictados con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 Superiores, esto es, los relacionados con los estados de excepción. Dichos Decretos Legislativos se clasifican en: Decretos de Declaratoria y los Decretos que contienen las medidas estrictamente necesarias para conjurar las situaciones de guerra exterior y conmoción interior o para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos en el caso del estado de emergencia económica, social y ecológica, los cuales deben tener conexidad con las circunstancias de la declaratoria del estado de excepción.

b. Se caracterizan porque: (i) deben llevar la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción y (ii) tienen control inmediato de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional".

c. Entre los decretos legislativos que pueden ser objeto de desarrollo por parte de las autoridades nacionales o territoriales mediante los actos administrativos generales no está el decreto de declaratoria del estado de excepción.

d. El control de legalidad se compone de los siguientes criterios formales: criterio objetivo: contra actos administrativos que contienen medidas de carácter general; criterio subjetivo: que sean proferidos por entidades nacionales o del orden territorial, lo que permite establecer el factor de competencia (Consejo de Estado o Tribunales Administrativos); y el criterio circunstancial o causal: dictados en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los Decretos Legislativos durante los Estados de Excepción, lo que permite entender que éstos son los que profiere el Gobierno Nacional en desarrollo del Decreto Legislativo que declaró dicho estado, los que a su vez regulan medidas de carácter legal sobre materias específicas."

CONCLUSIÓN DEL CASO

Una vez analizado de fondo el sustento fáctico y jurídico del acto administrativo objeto de control inmediato de legalidad, esto es, el Decreto 051 del 09 de abril de 2020, expedido por la Alcaldía del Municipio de Yotoco, Valle, el Despacho encuentra que, si bien se hizo referencia al Decreto Nacional No. 417 del 17 de marzo de 2020, lo cual condujo a que este Despacho admitiera el control inmediato de legalidad del aludido decreto municipal, lo cierto es que, a partir de un análisis material del contenido de ese acto, se evidencia que no desarrolla decretos legislativos.

Bajo esas circunstancias, atendiendo que la postura mayoritaria de la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Valle, se concluye que en el presente asunto deberá dejarse sin efectos el auto dictado por este Despacho a través del cual se resolvió admitir el control inmediato de legalidad del Decreto 051 del 09 de abril de 2020, proferido por el alcalde del municipio de Yotoco Valle, y, en su lugar, no avocar el conocimiento del medio de control, de acuerdo a lo expuesto en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Despacho 12 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE:

PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto No. 242 dictado dentro del presente asunto el 7 de mayo de 2020, mediante el cual se resolvió avocar el control inmediato de legalidad del Decreto 051 del 09 de abril de 2020, proferido por el alcalde del municipio de Yotoco – Valle, de conformidad con lo expuesto, y en su lugar.

SEGUNDO: NO ASUMIR el conocimiento de control inmediato de legalidad del Decreto 051 del 09 de abril de 2020, proferido por el alcalde del municipio de Yotoco – Valle, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: La presente decisión no hace tránsito a cosa juzgada, por lo tanto, procede en contra del acto administrativo aludido los medios de control pertinentes previstos en la Ley 1437 de 2011 o demás normas concordantes.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por vía electrónica al Municipio y al Ministerio Público y a través de la página web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la página web del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para conocimiento de la comunidad.

QUINTO: ARCHIVAR la actuación una vez en firme esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado